

**MARIO VARGAS LLOSA**

**CÉSAR ARIAS QUINCOT - JORGE AVENDAÑO**

**WALTER PEÑALOZA - DANIEL MORA - JULIO GOTLER**

# **CÓMO FUJIMORI JODIÓ AL PERÚ**



La presente obra, más que un intento de reconstrucción histórica, pretende germinar la reflexión a través de seis ensayos escogidos de grandes intelectuales peruanos, quienes meditan sobre el restablecimiento de la democracia de una de las dictaduras más perversas, abyectas y corruptas de la historia reciente latinoamericana: el fujimorato.

Recopilado en el 2001, este libro aún conserva los matices sobre los cuales debemos reflexionar: la perversión de la política, la destrucción de las instituciones, la desnaturalización de la moral, etc.

Los sucesos del 2000 y 2001 (el fraude electoral, los videos en que Montesinos, brazo derecho de Fujimori, entregaba ingentes fardos de dólares a congresistas, dueños de canales de televisión, militares, personajes de la farándula, arzobispos, etc., a fin de comprar sus anuencias) destaparon la corrupción de la dictadura, que sin embargo, se sabía desde años anteriores, mas la dictadura acallaba cualquier protesta en voz alta.

## NOTA EDITORIAL

Este libro recoge seis ensayos de personalidades de muy alta solvencia moral y política a quienes invitamos a reflexionar sobre la muy grave crisis política que ha ocasionado a la república el destape y derrumbe de la nefasta dictadura de Alberto Fujimori Fujimori y su perverso asesor Vladimiro Montesinos Torres que jugó a presidente del Perú, dada la ineficacia e irresponsabilidad del primer gobernante para dominar la escena política que comenzó a agravarse desde el autogolpe de abril de 1992 en que se instaura una verdadera dictadura que violó sistemáticamente la constitución, las libertades civiles, los derechos humanos, desencadenando una vasta y profunda corrupción en todos los órdenes oficiales e institucionales, tal como lo testimonian centenares de videos y grabaciones que el poder judicial y el congreso de la república se han preocupado en demostrarlos a la ciudadanía, antes de las elecciones generales del 8 de abril del presente año 2001.

Lo más sobresaliente de este desastroso periodo político de la insólita década del fujimorato es la inverosímil corrupción que tanto ha escandalizado al país y al mundo al comprobarse cómo se avasallaron conciencias a cambio de dinero. Solamente el putrefacto asesor presidencial, sórdido criminal y ladrón, Vladimiro Montesinos Torres, arrebató al estado peruano la increíble cantidad de más de mil millones de dólares, como fehacientemente está demostrado, aparte de las desbordantes cantidades de dinero que despilfarró este viboresco personaje en nombre del estado pe-

ruano, comprando políticos degradantes, empresarios del mundo de las comunicaciones, parlamentarios, jueces, militares del alto mando y personajes de las más altas instituciones, amparado por el déspota presidente, su gran socio en los viles negociados de armas, narcotráfico, operaciones financieras, préstamos internacionales, etc. hasta llegar al paroxismo en que Fujimori terminó fugándose cobardemente del Perú, bien pertrechado de millones de dólares efectivos y barras de oro, refugiándose en su país de origen el Japón que lo acoge en el colmo del cinismo.

No podemos bajo ningún concepto silenciar tan vergonzosos hechos, no solamente por su descarada brutalidad sino porque el pueblo peruano ha sido lesionado en su honor por sus propios representantes que lo hundieron con su desastrosa aventura política que tantos daños económicos y sociales ha ocasionado. Si calláramos nos convertiríamos en cómplices de un satánico régimen que pisoteó la dignidad histórica de la república, al montar un terrorismo de estado que vino a suplantar al feroz terrorismo de Sendero Luminoso que le permitió organizar sucesivos fraudes electorales para perpetuarse en el mandato y vivir en una permanente orgía de poder y latrocinio.

Los autores que participan en este libro han sido los francos representantes de una abierta y sólida oposición combativa, enormemente valerosa. Esta obra es un fiel testimonio de denuncia y esclarecimiento histórico y político de la criminal actuación del nefasto gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, censurado por el congreso de la república de incapacidad moral permanente, declarando la vacancia de la presidencia y acusándolo constitucionalmente de una serie de delitos perpetrados durante su deplorable mandato.

Lima, 22 de mayo de 2001

CARLOS MILLA BATRES  
editor



# La República

Director Fundador: Gustavo Mohme Llona Perú, jueves 26 de abril del 2001 Año 20 N° 7.056 Precio: S/.1.50 Director: Gustavo Mohme Semisora

**Se confirma que Fujimori sólo es un vulgar delincuente**

## SE LLEVO LINGOTES DE ORO



Testigo revela ante Fiscal de la Nación botín amasado por el ex presidente PAG. 2

Empate 1-1 con Brasil nos mantiene vivos en eliminatorias  
**Y se llama PERU**



Hasta ahora han ubicado US\$ 250 millones  
**Montesinos tenía S/. 1.500 millones** PAG. 2

INCOMPARABLES  
Nicole Kidman  
y Tom  
Cruise se  
separan [a13]



COPA LIBERTADORES  
La 'U' juega  
hoy ante el  
Vélez a las  
8:10 p.m. [a12]



ELECCIONES A LA VISTA  
Un 'click' y  
sabrás si será o  
no miembro de  
mesa [a13]



DOM. MARTES 6 DE FEBRERO DEL 2007 DIRECTOR GENERAL: ALEJANDRO MIRÓ QUESADA G. DIRECTOR: ALEJANDRO MIRÓ QUESADA G. AND. TEL. N° 81.741 - PRECIO EN LIMA S/2

INDEPENDENCIA  
Y VERACIDAD

# El Comercio

AL SERVICIO DEL PAÍS  
DESDE 1839

www.elcomercio.com.pe

TEMA DEL DÍA. LAS INCREIBLES CIFRAS DE LA CORRUPCIÓN

## Llegan a \$1.000 millones cuentas de Montesinos

Comisión Waisman pide plazo para investigar hasta el 15 de junio

COMPROMETE AL APRA



DIABABANOO... Agustín Múgica, ex ministro y secretario general del APRA, recibe el dinero de Montesinos.



# La República

Director Fundador: Gustavo Mahne Llona - Perú, domingo 4 de marzo del 2001 Año 20° N° 7.003 Precio: S/2,00 - Director: Gustavo Mahne Semler

**EXCLUSIVO** Toda la red y los testaferros de Montesinos

# ROBARON MIL MILLONES DE DOLARES

Mafia compró armas, aviones, hoteles, bancos, financieras, constructoras y creó empresas en Lima y en el exterior  
Comisión Waisman inicia mañana reto de desentrañar corrupción fujimontesinista

ESPECIAL: Págs. 21-22-23-24



# La República

Editor Fundador: Custodio Malme Linares - Perú, lunes 23 de abril del 2001 Año 20. Nº 7.060 Precio: S/ 1,50 Director: Custodio Malme Linares

E X C L U S I V O

Cúpula militar gastó millones en armas cuando Fujimori ya se iba

## ROBARON HASTA EL FIN DE LA DICTADURA



Copia de RM del 4 de setiembre del 2000 firmada por el entonces ministro de Defensa, Carlos Bergamino, mediante la cual se autoriza la compra de un cargamento de desactivación y red de comunicación por US\$ 18.810.08. A la izquierda, Villanueva, Rosales y Carlos Bergamino con Fujimori. Ambos generales habían recibido 'comisiones' millonarias.

■ Generales Villanueva, Salazar, Saucedo y Bergamino favorecieron a cuestionados proveedores de armamento a cambio de millonarias comisiones

PÁGINA 5-11

### Venero en negociado de Caja Militar

PÁG. 15

■ Testaferro de Montesinos creó firma fantasma para la operación

Afirma que Bayly hace daño con medias verdades

### Toledo: dinero de mi campaña es honesto

PÁG. 4

Alan García también promete desactivación de la ONP

### Bajaremos precio de medicinas en 50%

PÁG. 8

Pedido de centrales a candidatos por el Día del Trabajo

PÁG. 10

### Comprométanse a restituir derechos laborales

MARIO VARGAS LLOSA

## LA LIBERTAD RECOBRADA

El Colegio de Abogados de Lima fue una de las escasas instituciones en el Perú que, en estos años turbios, resistió a la dictadura y defendió contra ella, con gallardía principista, el Estado de Derecho que ella destruyó. Si todas las instituciones de la sociedad civil hubieran actuado en el Perú como lo hizo el Colegio de Abogados de Lima que, durante los ocho años de la dictadura (1992-2000), se enfrentó al régimen en nombre del Estado de Derecho, el golpe artero contra la libertad del 5 de abril de 1992 no hubiera prosperado, y no lamentaríamos ahora tantos crímenes contra los derechos humanos, el secuestro de la justicia y la libertad de expresión, el desmantelamiento de las instituciones y la corrupción generalizada a cuya sombra Fujimori, Montesinos y los cuarenta ladrones amasaron fortunas que producen vértigo.

Esta no es una endecha masoquista. Si queremos que el Perú no vuelva a padecer una dictadura, es indispensable un examen de conciencia para identificar qué hizo posible a la que acaba de desplomarse, y para evitar que la historia se repita, como viene ocurriendo desde los albores de la República, sucesión de intervalos democráticos dentro de una robusta tradición de espadones, caudillos y regímenes autoritarios. Esa es una tradición incivil, y si no se acaba con ella para siempre ella acabará con las posibilidades de que el Perú sea alguna vez un país moderno, libre y próspero.

Ahora tenemos una nueva oportunidad, como en 1945, 1956 o 1980, fronteras históricas en las que la descomposición y caída de un régimen de fuerza hizo posible la alternativa democrática. En esas tres ocasiones, la reconstrucción del Estado de Derecho, pese a haber sido recibida con

alborozo por la gran mayoría de los ciudadanos, fue frágil, impotente para resistir, al cabo de pocos años, una nueva subversión cuartelera.

¿Qué falló, cada vez? Ante todo, la memoria de los peruanos. Porque, no lo olvidemos, tanto el general Odria como el general Velasco Alvarado y como Fujimori y los militares felones del 5 de abril de 1992 contaron, al principio, con un importante respaldo de opinión pública, millares, acaso millones, de peruanas y peruanos a quienes la frustración y los quebrantos económicos, la violencia política y el desorden social, o la simple desesperación por la falta de soluciones a los enormes problemas, llevaron a creer que una dictadura, no entrabada por las formas puntillosas de la legalidad, podía ser más eficaz que un gobierno representativo. A esa falacia, que tantas veces en nuestra historia ha permitido a los regímenes autoritarios instalarse y durar, debe el Perú, pese a sus ingentes recursos y a su pasado de país de vanguardia, ser, hoy, una de las sociedades más atrasadas y pobres de América Latina.

Ahora, que tenemos tan vivos en el recuerdo estos ocho años de vergüenza, grabemos ciertas imágenes en nuestra conciencia para no olvidar nunca más el precio que paga el pueblo que se deja arrebatarse la ley y la libertad. Los miles de desaparecidos, los torturados y asesinados, los inocentes sepultados en las cárceles por jueces sin voces y sin rostros, que dictaban sentencia en sótanos muy parecidos a las cámaras donde los agentes del Servicio de Inteligencia (SIN) violaron y destrozaron a Leonor La Rosa, descuartizaron a Mariella Barreto, secuestraron, asesinaron y calcinaron a los estudiantes y al profesor de La Cantuta, o a los vecinos de los Barrios Altos y a tantas otras víctimas cuyos suplicios no llegaron a la luz pública y quedarán para siempre en la tiniebla y el olvido. Los torturadores, recordemos, ahora se pasean alegremente entre nosotros, ya que fueron amnistiados por esos congresos serviles que Montesinos y Fujimori hacían bailar a su aire, como el titiritero a sus fan-

toches. Algunos congresistas que votaron por aquella amnistía para los criminales van a ser candidatos a la reelección. A quienes vayan a votar por ellos hay que hacerles saber que los que asesinaron y torturaron ayer pueden volver a hacerlo mañana y que ninguna sociedad está segura si por sus calles deambulan, como pesadillas vivientes, quienes tienen las manos llenas de sangre y el corazón emponzoñado por el odio.

Recordemos los medios de comunicación envilecidos por el soborno y por el miedo, instrumentando las campañas de manipulación de la opinión pública generadas desde el SIN por el capitán de marras y sus planificadores psicosociales, entre ellos un célebre psiquiatra, ex asesino y ex loco, para convertir las verdades en mentiras, las mentiras en verdades, y para aniquilar con infamias y calumnias a sus críticos, que no tenían cómo ni dónde defenderse. Ahora que tenemos la fortuna de que haya unos diarios, unas estaciones de radio y unos canales de televisión donde se difunden distintas ideas, se hacen críticas, se cotejan divergencias y se fiscaliza al poder, recordemos que hasta ayer, o antes de ayer, lo que reinaba en el campo de la información en el Perú, con contadísimas excepciones, era un monólogo propagandístico embrutecedor, manufacturado por mercenarios de la pluma, de la voz y de la imagen, cuyo designio era mantener enajenado al pueblo peruano en la idolatría de un régimen que, de creer aquellos sahumeros, batía récords de crecimiento económico, generaba a diario miles de nuevos empleos y había disparado al Perú como un cohete hacia la modernidad. Ha bastado una leve brisa de libertad para que toda esa neblina de embustes auto-complacientes y pagados se eclipsara y apareciera la macabra realidad: una economía paralizada por la recesión y el endeudamiento, miles de fábricas cerradas, un desempleo canceroso y unos niveles de pobreza que, ellos sí, baten todas las marcas de nuestra historia reciente.

Es triste, también, que tantos países democráticos se dejaran embaucar por la dictadura peruana, o, sin dejarse engañar, a sabiendas de lo que hacían, le sirvieran de celestinas en la OEA y otras organizaciones internacionales, con el argumento de que no había que inmiscuirse en los asuntos internos de las naciones hermanas latinoamericanas. La dictadura no era tan escrupulosa con esta noción de la soberanía, pues no vaciló un segundo en contrabandear armas compradas en Jordania para las guerrillas que aspiran a derribar al gobierno colombiano. ¿Habría advertido el señor César Gaviria, nefelibata pertinaz, lo desairado de su posición profujimorista en los mismos días en que Fujimori y Montesinos, para embolsarse algunos millones más, lanzaban diez mil fusiles sobre su soberano país para que las FARC mataran y aterrorizaran a los colombianos?

Pero, sobre todo, tengamos siempre presente, como una obsesión, la parodia en que se convirtió en esos años la justicia, con jueces digitados por el poder político, cuya función principal pasó a ser la de legitimar, con artimañas leguleyas, las peores arbitrariedades cometidas por el dictadorzuelo y sus cómplices, además de subastar las sentencias y suministrar coartadas y amparos legales para los tráficos de los hombres y mujeres del régimen con los carteles de la droga, los contrabandistas y los traficantes de armas. Lo primero que hizo la dictadura fue cambiar a los jueces titulares por jueces provisionales. Sabía lo que hacía: de este modo, con el ochenta por ciento de los magistrados balanceándose en una cuerda floja, se aseguró el control del Poder Judicial. Si hay una demarcación nítida entre la civilización y la barbarie, ella se encarna en la clásica figura del justo juez, al que tanto honraron los escritores del Siglo de Oro, empezando por Cervantes, la del magistrado que administra justicia con sabiduría y probidad. Todo puede andar mal en una sociedad, pero si los tribunales funcionan con un mínimo de independencia y equidad todavía hay esperanza. Una justicia digna de ese nombre es el funda-

mento más sólido de la libertad, una palanca que puede remover montañas, un ariete contra las murallas del despotismo. Pero cuando la Justicia se pervierte, y torna a ser un mero instrumento del poder político, todo está amenazado y tarde o temprano será víctima de la arbitrariedad, la violencia y la corrupción. Por eso, la dictadura se apresuró desde el primer momento en avasallar al Poder Judicial, marginando y expulsando a los mejores y confiando los cargos clave a jueces con librea, verdaderos domésticos del régimen. Sin ese envilecimiento de la Justicia, al que, por desgracia, muchos magistrados se prestaron de buena gana, jamás hubiera alcanzado la corrupción en estos años esa dimensión alucinante que nos revelan los destapes y escándalos de cada mañana.

En estos años, no hubo prácticamente una sola repartición o dependencia del poder que no fuera mancillada — los funcionarios honestos sustituidos por venales—, a fin de que constituyeran piezas clave de la maquinaria de coacción del Estado, orientada a garantizar la perpetuación del régimen, y a facilitar el saqueo de los recursos públicos. La SUNAT, oficina recaudadora de impuestos, es un ejemplo típico. Como dijo aquel célebre ministro de Odría —«Para los amigos, todos los favores; para los enemigos, la ley»—, la tributación se convirtió en un instrumento de chantaje, a fin de ganar adeptos para el régimen, o aniquilar económicamente a sus adversarios políticos, sometiendo sus empresas a investigaciones y acosos asfixiantes, o, simplemente, quebrándolas. Por lo demás, cada día aparecen en la prensa nuevos ejemplos de cuál era la manera expeditiva que tenía un hombre de negocios de desfacer estos entuertos: recurriendo a jueces espurios, o abriendo la cartera y untando las manos ávidas de Vladimiro Montesinos.

¿Alguna vez ganó una licitación pública un empresario no adicto al régimen? Tal vez algunas veces, pero esa fue la excepción, no la regla. Por eso, sería más adecuado recordar que los ministros, asesores, parlamentarios y miembros

de las mafias gubernamentales las ganaron casi siempre, para las empresas que manejaban a través de testaferros y que, gracias a ello, un puñado de deshonestos mercaderes hicieron fortunas ahora inexpugnables, porque, aunque producto de contubernios y privilegios, sus negocios guardaban, gracias al maquiavélico sistema entronizado para ese fin, la apariencia de la legalidad.

Las listas de exacciones, abusos, atropellos y acciones dolosas podrían prolongarse por horas, por días. Pero estas muestras bastan y sobran. Lo que de ningún modo debemos olvidar es evidente. Por imperfecta, ineficiente y poco honesta que una democracia sea —y las nuestras lo han sido a veces, nadie lo podría negar—, una dictadura es infinitamente peor. Porque, a diferencia de una democracia, ella sí puede silenciar las críticas y atajar toda forma de freno a sus excesos, y puede también eternizarse mediante la fuerza y el engaño, y de este modo perpetuar los atropellos, violencias y robos hasta convertirlos en una forma de existencia, a la que el conjunto de la sociedad debe resignarse como algo fatídico, igual que a los fenómenos de la naturaleza.

La verdad, sin embargo, es otra. Una dictadura no es nunca fatídica, como un temblor o un ciclón. Es una empresa humana, una aventura urdida en las sombras por conspiradores amparados en la fuerza de las armas, una acción que puede ser sofocada en embrión por un pueblo consciente del precio que, tarde o temprano, deberá pagar por la destrucción del Estado de Derecho. Esa conciencia debemos crearla y fortalecerla, de manera sistemática, ahora, hasta inmunizarnos contra la aventura golpista. La primera obligación de la renaciente democracia peruana es tomar cuentas a los que, hace ocho años, aniquilaron nuestra libertad y nos arrastraron al desvarío del que solo ahora salimos. La política del borrón y cuenta nueva que los cómplices de Fujimori y Montesinos quieren vendernos, disfrazada con la piel de cordero de la reconciliación nacional, es éti-

camente inaceptable y políticamente suicida. No alienta en esto que digo el menor espíritu de venganza, solo la estricta justicia. Quienes cometieron el mayor crimen que se puede cometer contra un pueblo (privarlo de su libertad) deben ser sancionados, luego, claro está, de un proceso legitimado por todas las garantías necesarias. Simplemente, no es tolerable que esos politicastos y militares sin honor que el 5 de abril de 1992 nos regresaron al viejo sistema oscurantista de la brutalidad, la censura y la mentira, a cuyo amparo se han cometido crímenes nefandos y robos multimillonarios, gocen ahora, en la impunidad, del uso discrecional de los botines de sus fechorías, y se dispongan a repetir las apenas se presente una nueva ocasión. Así ha ocurrido en el pasado, cierto. Pero por eso nuestro sistema democrático ha sido socavado, una y otra vez. Si queremos romper el ciclo infernal, hay que empezar esta alborada democrática sancionando ejemplarmente, a manera de escarmiento preventivo, a los golpistas del 92.

La lucha contra la corrupción, que es, en estos momentos, la ambición más cara del pueblo peruano, pasa por una limpieza a fondo de las instituciones. Ellas estaban lejos de ser perfectas, desde luego. Pero en estos años fueron envilecidas y desnaturalizadas de una manera profunda, para que sirvieran los designios delictuosos de la pandilla gobernante. Prácticamente todas, pero, sobre todo, las Fuerzas Armadas y la Justicia, fueron objeto de purgas y reorganizaciones encaminadas a marginar o destituir a los oficiales constitucionalistas, a los jueces probos y a los funcionarios honestos y competentes, para reemplazarlos por dóciles, prevaricadores e ineptos, a los que el régimen podía instrumentalizar para sus operaciones punibles. Si el gobierno democrático, debidamente mandatado en las elecciones del próximo abril, no emprende una reforma radical de esas instituciones, que las rodea de la cizaña que ha quedado enquistada en ellas, y no les devuelve la credibilidad y el prestigio poniendo al frente de ellas a profesionales dig-

nos, respetuosos de la ley y capaces, en vez de ser ellas lo que son las Fuerzas Armadas y los tribunales en los países libres —bastiones de la legalidad—, las bayonetas seguirán gravitando, como espada de Damocles, sobre el porvenir de nuestra democracia.

Sin embargo, con ser tan graves las lesiones infligidas por ocho años de dictadura a nuestra vida política e institucional, acaso el daño peor, el de más pernicioso y demorado efecto, sea el que ha causado en el ámbito de los valores y las ideas, introduciendo en él la confusión y una sarta de prejuicios y estereotipos que hacen las veces del pensamiento. Este es el corolario que me entristece más de lo sucedido en el Perú en este último ochenio, porque estoy convencido de que las ideas influyen en la historia y encarrilan el devenir de una sociedad. Nuestra cultura política ha retrocedido de manera considerable, por razones que las circunstancias explican, sin duda, pero que igual pueden tener efectos devastadores sobre el proceso de desarrollo y modernización. Por culpa de este régimen liberticida, la palabra liberalismo ha pasado a ser una mala palabra en el Perú, un concepto que gran número de peruanos asocia de manera automática a los tráficos mercantilistas que, en los procesos de privatización de empresas del Estado o licitaciones de obras públicas, sirvieron para que los dignatarios de la dictadura y un grupo de banqueros y empresarios nacionales y extranjeros hicieran pingües negocios, defraudando la fe pública y dilapidando los recursos del Estado. El colmo del escarnio, para los valores liberales que yo y muchos defendemos, es que, en estas elecciones, aparezca como el «candidato liberal», o «neoliberal», nada menos que Carlos Boloña, ex ministro, por dos veces, de la dictadura. Si eso se llama ser liberal —palabra indisociable de la libertad política— estamos, en lo que a ideas y valores se refiere, en la confusión más absoluta, en una suerte de galimatías jeroglífico.